ÍNDICE.

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 10 DE ABRIL DE 2012.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
63/2009	<p>CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO).</p>	3 A 42
143/2008	<p>CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en contra del Municipio de Guadalajara, Jalisco, por la invalidez de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 24, 25, 32, 33, 34, 36 37 y 40 del Reglamento Interno para la Inspección Sanitaria en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ).</p>	43 A 49
8/2011	<p>RECURSO DE QUEJA derivado del Incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 90/2011. Promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ)</p>	50 A 71 INCLUSIVE. EN LISTA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 10 DE ABRIL DE 2012.

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

JUAN N. SILVA MEZA.

SEÑORES MINISTROS:

**SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.
SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ.
OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.**

AUSENTE: SEÑORA MINISTRA:

MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:15 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión pública ordinaria, correspondiente al día de hoy. Señor secretario, sírvase dar cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se someten a su consideración los proyectos del acta de la sesión pública número treinta y siete ordinaria, celebrada el jueves veintinueve de marzo de dos mil doce, y del acta de la ceremonia solemne luctuosa celebrada el día de ayer.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Señora y señores Ministros, están a su consideración las actas con las que se ha dado cuenta ¿Hay alguna observación? y si no es así, consulto si se aprueban en votación económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE) ESTÁN APROBADAS LAS ACTAS SEÑOR SECRETARIO.** Continúe dando cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2009. PROMOVIDA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN CONTRA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA.

Bajo la ponencia del señor Ministro Aguirre Anguiano, y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. SE SOBRESEE EN LA PRESENTE CONTROVERSIA EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO QUE FUE SUPRIMIDA Y EL ARTÍCULO NOVENO QUE FUE DEROGADO POR EL DECRETO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE FALLO.

SEGUNDO. CON LA SALVEDAD ANTERIOR, ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

TERCERO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN ACATAR LOS PRODUCTORES E INTRODUCORES PARA LA MOVILIZACIÓN DE GANADO PORCINO, CARNE EN CANAL O PROCESADO EN EL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL NUEVE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA.

CUARTO. PUBLÍQUESE ESTA EJECUTORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Tiene la palabra el señor Ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para hacer la presentación de su proyecto.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Ministro Presidente.

Como ustedes recordarán señores Ministros, el Ejecutivo Federal impugna el Decreto que contiene las disposiciones que deberán acatar los productores e introductores para la movilización de ganado porcino, carne en canal o procesado en el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de mayo de dos mil nueve.

En el proyecto, además de establecerse que el Tribunal Pleno es competente, que la demanda se presentó oportunamente y que quienes comparecen en representación de las partes, acreditaron su legitimación, se examinan dos cuestiones: La primera, relacionada con el sobreseimiento del artículo 5º del Decreto impugnado en la parte que señala: Que el costo de desinfección del vehículo será a cargo del transportista; así como el sobreseimiento relativo al artículo 9º; ello porque la primera disposición fue reformada para eliminar la porción normativa referida, y la segunda fue derogada por Decreto publicado el ocho de agosto de dos mil nueve.

Ahora bien, el anuncio que conforme al criterio actual de este Pleno, se modifica el proyecto en este apartado, lo produzco a fin de que el sobreseimiento comprenda la totalidad del artículo 5º de acuerdo con el criterio nuevo, no establecido en el momento de la presentación del proyecto.

En segundo término, se propone declarar la invalidez del Decreto impugnado porque se considera que viola lo dispuesto por los artículos 73, fracciones IX y X, 117, fracción V, y 131 constitucionales, ya que invade facultades exclusivas de la Federación, limita el libre comercio entre los Estados y el ingreso y

desplazamiento del ganado porcino en pie, en canal o procesado dentro del Estado de Colima, pues exige a las personas, organizaciones y agrupaciones, la obtención de permisos de internación, la tramitación de credenciales, además de obligarlas a someterse a revisiones e inspecciones sanitarias en puntos de control interno, así como a la verificación de documentación y que el movimiento del ganado se efectúe en un horario predeterminado.

Estimo que este asunto sigue criterios genéricos preestablecidos ya por esta Suprema Corte, alguno de los cuales se invocan en el proyecto, no desconozco otros puntos de vista pero por eso está a su análisis y comentarios, señores Ministros.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Aguirre Anguiano. Señora y señores Ministros pongo a su consideración los temas procesales, los Considerandos: Primero, competencia. Segundo, oportunidad. Tercero, legitimación activa. Cuarto, legitimación pasiva; y me estaciono para entrar al Quinto: Causas de improcedencia por si hay alguna observación ¿Del Primero al Cuarto hay alguna observación? si no es así consulto a ustedes si se aprueba en forma económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE)**

Estas votaciones serán parciales, definitivas si no hay inconveniente.

Está a su consideración el Considerando Quinto en relación con las causas de sobreseimiento e improcedencia, respecto de las cuales el señor Ministro Aguirre Anguiano nos dice:

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Lo presentaré si usted gusta, presentación por considerando señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Adelante señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: De las fojas treinta y cuatro a cuarenta y seis, se estudian causales de improcedencia en el Considerando Quinto, y la consulta propone sobreseer respecto del artículo 5º impugnado específicamente en la parte normativa que señala que el costo de desinfección del vehículo, será a cargo del transportista, etcétera, propongo que se modifique, no lo he hecho en el proyecto, pero en caso de ser aprobado, en el engrose si ustedes así lo determinan se hará el ajuste correspondiente, que se sobresea todo el artículo 5º, no nada más ese tramo normativo que se aludía.

Esto es lo que se contiene, y por lo que ve al artículo 9 que se sobresea en su totalidad, esto es lo que contiene el Considerando Quinto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración la propuesta modificada que hace al proyecto el señor Ministro ponente. Señor Ministro Ortiz Mayagoitia.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: El cambio de proposición que hace el señor Ministro ponente y que en parte atiende a un dictamen que se circuló por esa Presidencia, a mí me deja alguna duda porque finalmente la propuesta del proyecto es la inconstitucionalidad del Decreto en su totalidad; entonces, si sobreseemos respecto del contenido total de estos dos preceptos a la hora que se declare la inconstitucionalidad del Decreto debe entenderse que éstos subsisten por sí solos cuando en realidad no tendrán funcionalidad, no sé si la solución estaría en alcanzar la invalidez de estas normas en términos del artículo 41, porque dependen de las que se han declarado inconstitucionales, pero si de pasar el proyecto en los términos en que acaba de proponer el sobreseimiento el señor Ministro, yo estaba de acuerdo con que se

sobresea solamente respecto de la porción normativa que fue modificada porque eso deja integrados estos artículos al Decreto y cuando se hable de si es constitucional o no lo es, la declaratoria abarca todo, ése es mi comentario.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Este comentario que hace el señor Ministro Ortiz Mayagoitia nos lleva tal vez a encorchetarlo, dejarlo encorchetado y ya en función del resultado o se mantiene o se hace la modificación. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Presidente. Yo quería señalar precisamente eso desde el principio; efectivamente está impugnado el Decreto pero sólo hay concepto de invalidez respecto de ciertos artículos, y el proyecto propone que como consecuencia, conforme al criterio que hemos sostenido se invalide todo el Decreto, el problema que yo le veo y por eso estaría de acuerdo en que se encorchete, es que el proyecto sólo proponía originalmente, antes de la propuesta del Ministro ponente que nos acaba de formular, que hay una porción normativa del 5º, pero se sobreseía completo sobre el 9º; entonces el 9º seguiría teniendo el mismo problema, considero que lo mejor es dejarlo encorchetado.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Encorchetado ya al resultado ¿verdad? ¿Está de acuerdo el señor Ministro ponente?

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Sí, me parece muy oportuna su observación de que es conveniente que quede encorchetado y así podremos progresar, si le parece bien, sintetizo lo que podría ser el estudio de fondo que está en el Considerando Sexto y que corre de las páginas cuarenta y ocho a setenta y ocho.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Adelante por favor señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Aquí se propone declarar la invalidez del Decreto impugnado tal y como lo manifestó el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, porque se considera que violenta lo dispuesto en los artículos 73 fracciones IX y X, 117 fracción V, y 131 de la Constitución Federal, ya que invade facultades exclusivas de la Federación por limitaciones al libre comercio entre Estados y al ingreso y desplazamiento del ganado porcino en pie, en canal o procesado dentro del Estado de Colima, pues los artículos del Decreto, exigen a las personas, organizaciones y agrupaciones, la obtención de permisos de internación, la tramitación de credenciales, se les obliga a someterse a revisiones e inspecciones sanitarias en puntos de control interno, así como la verificación de documentación, y a que el movimiento del ganado se efectúe en un horario predeterminado. Igualmente se menciona que el Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución expidió la Ley Federal de Sanidad Animal, la que en su Capítulo III establece las reglas que se deben seguir para modificación de mercancías dentro del territorio nacional, de las cuales existe un señalamiento expreso de que las autoridades estatales y municipales no podrán exigir mayores requisitos que los establecidos por la Federación. Quiero decirles lo siguiente, esta ley ciertamente es de vigencia ulterior al Decreto combatido y a la presentación correspondiente. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro. ¿El Considerando Sexto donde se está definiendo la litis a la que ha hecho referencia el señor Ministro ponente, tiene alguna mención? Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente.

Yo estoy de acuerdo con la declaración de invalidez que se propone en el proyecto pero no por las mismas razones que en éste, cuando se hace la modificación de la que se ha dado cuenta tanto por el Ministro ponente, el Ministro Ortiz y el Ministro Franco hace unos momentos, lo que se modifica es el artículo 5° y se deroga el artículo 9° del Decreto del Gobernador del Estado de Colima, cuando se hace esta modificación lo que queda fuera es todo el tema de las alcabalas como el mismo proyecto lo reconoce, si queda fuera el tema de las alcabalas, a mí me parece que ya no estamos ante los supuestos del artículo 117 de la Constitución, sino estamos ante los supuestos de salubridad general de la República del artículo 73, fracción XVI. Creo que efectivamente se produce una invasión con este Decreto por parte del Gobernador del Estado, pero insisto, no porque esté estableciendo restricciones al comercio, sino porque está afectando las competencias de la Federación en materia de salubridad general de la República. El artículo 3° de la Ley General de Salud, que como sabemos todos es una ley marco, o una ley de bases, o una ley general en tanto distribuye las competencias tanto para la Federación, como para los Estados, y para el Distrito Federal y en algunas medidas también para los Municipios determina que en los términos de esta ley es materia de salubridad general y por ende competencia de la Federación en términos de la fracción XXII del mismo precepto, el control sanitario de productos y servicios, y de su importación y exportación. Creo que esto efectivamente es lo que se viola, además de lo señalado en el artículo 13, Aparado A, fracción II, que específicamente lleva esta competencia al ámbito de la Federación. Posteriormente y ahora lo mencionaba el propio Ministro Aguirre, se hace una consideración en la parte final del proyecto en lo que tiene que ver y se transcriben de hecho algunos preceptos sobre el tema de la movilización, preceptos de la ley sobre el tema de la movilización, de la Ley Federal de Sanidad Animal que me parece a mí, encaja en las competencias de salubridad general de la República; creo

entonces, desde mi punto de vista que efectivamente se produce la invalidez de este Decreto así en general, está encorchetado el tema de los efectos y de sus alcances, sobre eso no me pronunciaré en este momento, pero sí estoy de acuerdo con el proyecto del señor Ministro Aguirre en la declaración de invalidez, pero no por una violación al tema de alcabalas que ha quedado superado ni una restricción al comercio interestatal sino como una violación a la competencia federal en materia de salubridad general de la República. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío.

En relación con la manifestación del señor Ministro Cossío, quisiera hacer un comentario, y la forma en que se está llevando ahora, inicia ya la discusión, estamos amalgamando la litis y el Séptimo ¿verdad? Eso es lo que desprendemos de esta participación. Señor Ministro Franco y después el señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente.

También coincido con lo mencionado por el señor Ministro Cossío, en el sentido de que en realidad no es un problema de comercio sino está inmerso en el problema de salubridad general, salud y sobre todo salubridad animal, específicamente, yo tendría dudas de que necesariamente el Decreto sea inconstitucional por las siguientes razones:

Efectivamente en la Ley General de Salud vigente cuando se expidió el Decreto y en la actual, porque el artículo 3° sufrió una modificación, simplemente de orden en las fracciones al haberse abrogado algunas ¿no? En aquél entonces era la fracción XXIV ahora es la XXII, efectivamente se señala como materia de

salubridad general el control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación, después en la distribución de competencias en el artículo 13, la parte correspondiente a esto queda como materia específica de la Federación y no de las entidades federativas, pero la propia ley establece que puede haber la posibilidad de coordinación ya no de concurrencia entre la Federación y los Estados en esta materia y particularmente la Ley de Sanidad Animal que es ley federal, ya no general, también establece la posibilidad de que se establezcan mediante convenios de coordinación esto con los Estados.

En el caso concreto de Colima ante esta situación nos permitimos buscar y nos encontramos que hay un Acuerdo específico de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomentos Sanitarios que celebran la Secretaría de Salud con la participación de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios y el Estado de Colima, de fecha 4 de febrero de 2005, que hasta donde pudimos verificar en los registros y en la consulta que hicimos aquí en Compilación de Leyes, sigue vigente, en ese convenio, en ese acuerdo específico de coordinación se le concede al Estado el apoyo de ciertas medidas, entre las cuales está precisamente esto, hay dos anexos en donde se va especificando y está esto.

Consecuentemente, insisto, por estas razones tendría dudas de que en automático el Acuerdo resulte inconstitucional, me parece que se tendría que hacer el análisis y en lo personal estimo que el Decreto puede ser inconstitucional en virtud de este Acuerdo específico de coordinación que existe entre la Federación y el Estado de Colima. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Franco.

Señor Ministro ponente, le voy a dar la palabra al señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Muy bien, muy bien.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente.

Si bien es cierto que el actor, que es el Poder Ejecutivo Federal planteó en su demanda que el Decreto impugnado era inconstitucional, primordialmente dijo, porque constituye una restricción al comercio entre los Estados ya que se estableció una carga onerosa para la introducción o la movilización de ganado porcino al Estado de Colima, lo que vulnera la competencia del Congreso de la Unión para establecer gravámenes, y además por lo dispuesto en el 117 que prohíbe a los Estados imponer las cargas económicas a la introducción o circulación de mercancías, así como establecer medidas para impedir la introducción o movilización de ganado porcino en pie, carne en canal o procesado para su comercialización en el Estado, en detrimento, dice el Ejecutivo de las competencias de la Federación expresamente previstas en la Constitución Federal.

Como hemos señalado, el Ejecutivo local reformó —ya lo dijimos acá— el Decreto impugnado eliminando la aportación económica que se fijaba; sin embargo, subsisten las demás disposiciones relativas a diversas medidas que deberán acatar los productores y los introductores para la movilización de este ganado porcino, su carne en canal o procesado en el Estado de Colima que —a mi juicio— debemos primero establecer qué tipo de medidas constituyen para de ahí verificar su constitucionalidad o su inconstitucionalidad en su caso; así, considero que de la lectura del Decreto impugnado se advierte que contiene medidas que tienden a

verificar la sanidad de los referidos productos, por lo que si bien es cierto que esto podría implicar restricciones a la introducción o movilización de los mismos, lo que debemos analizar, desde mi punto de vista, es si el establecimiento de estas medidas son competencia o no del Estado de Colima.

Conforme a los artículos 4º, párrafo cuarto, y 73, fracción XVI, de la Constitución, y como ya lo ha sostenido además este Pleno, la materia de salubridad general es concurrente entre la Federación y las entidades federativas. Ahora, es cierto que en ejercicio de esa facultad legislativa el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Sanidad Animal, de observancia general en todo el territorio nacional y cuyo objeto es, entre otros, fijar las bases para el diagnóstico, la prevención, el control, y la erradicación de las enfermedades y plagas que afecten a los animales, regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos tipo inspección federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano; ello, en coordinación con la Secretaría de Salud. Esta ley federal establece también las atribuciones de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para tutelar la sanidad y el bienestar animal; así como las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y el establecimiento tipo inspección federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de estos bienes de origen animal.

No obstante estas facultades otorgadas a las autoridades federales, lo cierto es que precisamente por tratarse de una materia, la de salud, concurrente, las autoridades estatales también pueden actuar para prevenir que en su territorio se afecte la salud, en este caso en cuanto a la sanidad animal; por tanto, si bien es cierto que conforme a la fracción V del 117 de la Constitución Federal: Los Estados no pueden, en ningún caso, prohibir ni directa ni indirectamente la

entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera; también es cierto que ello no puede traducirse en que en ningún momento puedan establecer medidas en materia de sanidad animal que constitucionalmente —repito— es una materia que compete tanto a las autoridades federales como estatales al vincularse con la salud en general, y si bien estas medidas eventualmente pueden llegar a restringir el comercio entre los Estados, esto no es inconstitucional, dado que no es admisible creer que so pretexto de no prohibir o impedir el libre comercio las entidades federativas no puedan prevenir el contagio de determinadas enfermedades, o establecer medidas de cuarentena, etcétera, dentro de su ámbito territorial; por lo tanto, para mí, el Decreto impugnado no es inconstitucional, pues como he dicho de su lectura se infiere que prevé medidas tendentes a prevenir el contagio de enfermedades propias del ganado porcino; por lo que mi voto será en contra de la propuesta del proyecto. Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls. Señor Ministro Luis María Aguilar, después el señor Ministro Ortiz Mayagoitia.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias señor Presidente. Yo también creo que no es aplicable o no hay una extracción al artículo 117 constitucional como decía el Ministro Cossío, en eso sí coincido; sin embargo, sí veo que hay una infracción al artículo 73 fracciones IX y X, sobre todo al artículo 73 fracción IX, en el sentido de que se establecen restricciones al comercio, ¿Por qué? Aun suponiendo como decía el Ministro Valls, que las cuestiones de sanidad pudieran ser concurrentes y que aun el Estado de Colima pudiera tener una intervención en estas cuestiones, la verdad es que no es una cuestión de salubridad solamente, de hecho con las reformas que se hicieron se quitó

inclusive el costo económico de estas actitudes, de estas conductas y se deja solamente una restricción a la introducción de este tipo de productos; inclusive, ahí se dice en la disposición correspondiente, se dice: “sin la presentación de este permiso no podrá ingresar al territorio estatal ninguna cabeza de ganado o producto en canal porcino.” Para mí eso es una restricción. Es cierto, pudieran tener cierta facultad para revisar la cuestión sanitaria, tanto la Federación como el Estado, pudiera yo coincidir con eso, pero aquí el problema es que se está haciendo específicamente lo que prohíbe el artículo 73 fracción IX, estableciendo requisitos que restringen el comercio, precisamente estos son los requisitos que se tienen que evitar, para eso están las facultades del Congreso de la Unión como una obligación de impedir que se establezcan requisitos que impidan el libre comercio y creo que esto en todo caso le corresponde solo a la Federación, no en la cuestión sanitaria, sino en la misma introducción de este tipo de productos al territorio de algún Estado, como en este caso, el de Colima, porque sin este requisito no pueden introducirse los bienes al territorio del Estado de Colima.

Por eso para mí, la inconstitucionalidad sólo se da, no del artículo 117 como se propone, sino sólo del artículo 73 fracción IX, quizá de la X, y de alguna manera puedo coincidir en que la cuestión sanitaria puede ser concurrente, pero aun así no se trata sólo de hacer una inspección fito-sanitaria, no se trata solamente de hacer una calificación sobre la calidad de este producto, sino se trata de impedir que transite dentro del territorio de un Estado, determinada mercancía, y por lo tanto, para mí ahí está directamente involucrada la prohibición que se contiene en el artículo 73 constitucional.

Por eso, para mí desde ese punto de vista es inconstitucional sólo en relación con esta disposición y aún más, sé que en el proyecto también se hacen unas argumentaciones en relación con la ley, que pudieran establecer algunas posibilidades de tránsito, como están

propuestas, pero bueno, creo que la inconstitucionalidad no se da confrontando una disposición con otra ley, sino siempre como debe ser conforme a las disposiciones constitucionales. Para mí entonces, en resumen —insisto y reitero— es la inconstitucionalidad. Sí se da, pero sólo en relación con la prohibición o limitación del artículo 73 constitucional en su fracción IX específicamente. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted. Señor Ministro Ortiz Mayagoitia, después el señor Ministro Cossío Díaz.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Gracias señor Presidente, coincido con quienes han dicho que este Decreto involucra en su contenido tres temas muy importantes: Restricciones al comercio o condiciones. Salud fito-sanitaria, concretamente animal en el caso. Y salud humana. Entonces ¿Cuál es la prevalencia del Decreto? ¿Cuál es su mayor sustancia a la que debemos atender para juzgar su constitucionalidad? Yo no creo que deba ser la Ley Federal de Sanidad Animal, en el proyecto se invoca esta ley.

El artículo 67 de la misma, dice: “Corresponde a la Federación, por conducto de la Secretaría, ejercer de manera exclusiva la atribución de determinados requisitos zoosanitarios que deben observar los interesados en movilizar mercancías reguladas en el territorio nacional, por lo que las autoridades estatales o municipales no podrán exigir mayores requisitos que los establecidos por la propia Secretaría”.

Este artículo está presente en la lógica de las consideraciones del proyecto; sin embargo, es cuestionable sustentar la decisión de este Tribunal Pleno en esas normas, por las siguientes razones: No hay precedente jurisdiccional que haya valorado en acción, controversia

o amparo, la constitucionalidad de la Ley Federal de Sanidad Animal, en relación con el contenido de los artículos 4°. Concurrencias de Estados y Federación; 115. Funciones públicas exclusivas del Municipio, potestad legislativa para dar bases generales de los Estados hacia los Municipios, y 73, fracción XVI. Salubridad general.

Ninguno de los precedentes existentes ha analizado el sustento constitucional de la Ley Federal de Sanidad Animal, sino únicamente algunos actos concretos de aplicación o pretensiones de un Estado para obtener ingresos fiscales a partir de requisitos a productores agropecuarios.

No parece adecuado declarar la invalidez de una norma local porque contraviene el texto de la Ley Federal de Sanidad Animal, y por ello se dice: “Es contraria a la exclusividad de la Federación en materia de comercio”. No existe criterio previo, ni un razonamiento suficiente para identificar como sinónimos constitucionales la exclusividad de la Federación para legislar en comercio con la facultad exclusiva para legislar en materia de sanidad animal. Esta última está prevista en ley secundaria y no en la Constitución.

Además, tal declaración implicaría la validación de la Corte respecto de esa supuesta exclusividad y daría por sentada la constitucionalidad y validez de la Ley Federal de Sanidad Animal como fuente de atribuciones y exclusiones para los tres órdenes de gobierno.

En lugar del argumento referido a la Ley Federal de Sanidad Animal, sugiero respetuosamente que se elimine toda esa referencia para mantener el sentido del proyecto, únicamente a partir de la intencionalidad de regular el comercio entre Estados y la internación de mercancías al territorio de Colima como motivo y

razón determinante y patente de todo el ordenamiento analizado sin perjuicio de las atribuciones que constitucionalmente se puedan ejercer en los rubros de “Rastro”, “Central de abastos.” y “Tránsito, tanto de los Municipios como del Estado, así como aquellas otras atribuciones concurrentes en materia de salubridad general”.

Del Dictamen que distribuyó el señor Presidente, me llamó mucho la atención la referencia que se hace al artículo 10 de esta Ley Federal de Sanidad Animal, conforme al cual “en los casos de salud animal que tengan incidencias sobre la salud humana”, declara ya el caso como de salud general, como de salud humana, y dice “que todas las actividades de control serán coordinadas por la Secretaría de Salud”.

Entonces puntualizo, creo que no hay violación al artículo 117, sino a la facultad exclusiva de la Federación para legislar en materia de comercio, y en cuanto a las medidas de salud animal que establece este Decreto, todas inciden en la salud humana, son cerdos para el sacrificio que deben ir a determinados rastros, o son cerdos en canal que deben cumplir con ciertos requisitos, particularmente el lugar donde se hizo el sacrificio; es decir, son mercancías; se restringe por razones de salud el libre ingreso y distribución, esto, si hay esta incidencia en salud humana, sólo puede hacerse bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, y aquí no se ha cumplido con ese requisito; por lo tanto, coincido en gran parte con el señor Ministro Cossío y con el señor Ministro don Luis María Aguilar, y con el ponente, desde luego, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto en su conjunto, yo advierto en este Decreto una intención clara de protección al comercio y producción local de productos porcinos, dificultando el ingreso de cárnicos procedentes de otras regiones del país, no creo que el tema de control sanitario sea en el caso un simple pretexto para establecer estas condiciones, lo único que sostengo es que este control

sanitario tiene que derivar de la Secretaría de Salud y no de la Secretaría encargada de aplicar la Ley de Sanidad Animal, pero coincido con la declaración de inconstitucionalidad. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente, el Ministro Franco planteó un problema que me parece muy importante, si efectivamente estamos ante un problema de salubridad general, como lo hemos, creo que, aceptado todos con independencia de la incidencia que pueda tener este tema, y esta salubridad general tiene que tener repercusiones sobre la sanidad animal, ahora lo explicaba con mucha claridad el Ministro Ortiz Mayagoitia, el planteamiento que hace el Ministro Franco del artículo 67 de la Ley Federal de Sanidad Animal, creo que es muy importante; si efectivamente se diera aquí la posibilidad de convenir y de qué cosas se pueden convenir, pues entonces creo que la óptica de la solución tendría que ser distinta y efectivamente tendríamos que bajar a analizar qué cosas sí y qué cosas no se pueden establecer entre estos convenios.

Sin embargo, en el artículo 67, en sus dos párrafos leo dos cosas diferenciadas: Primero. “La Federación, por conducto de la Secretaría, debe ejercer de manera exclusiva la atribución de determinar requisitos zoonosanitarios que deban observar los interesados en movilizar mercancías reguladas en el territorio nacional”. Hasta aquí es federal y sólo federal la determinación de requisitos, y dice en adición a lo anterior: “Por lo que las autoridades estatales o municipales no podrán exigir mayores requisitos”. Entonces, hay una primera facultad que es la determinación pura y dura de requisitos.

Ahora, en la segunda parte, en el segundo párrafo de este mismo artículo 67, dice: “La Secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de los Estados o el Distrito Federal con la participación de los Municipios, con objeto de coordinar acciones para la vigilancia”. Entonces, creo que lo que se puede coordinar es la vigilancia, pero no así la atribución de los requisitos en este sentido.

Si volvemos al Decreto que está impugnado, que está en la página treinta y ocho del proyecto del señor Ministro Aguirre, yo sí encuentro que varios elementos que están en el propio Decreto no son elementos simplemente de coordinación, de vigilancia, sino son elementos de determinación normativa aun bajo la vertiente zoonosanitaria, porque dice: “Deberá contar con un permiso vigente de internación expedido por la Secretaría, el cual será otorgado previo dictamen del Subcomité Técnico Estatal en las campañas de fiebre porcina clásica y enfermedad de aujeszky y deberá exhibir los puntos de verificación”. Eso en el primer artículo.

En el tercero: “Se fija el período de permanencia autorizado para el ganado porcino que ingrese al sacrificio de los rastros del Municipio del Estado”. En ese mismo artículo 3º del Decreto dice: “En caso de que el introductor no cumpla con esta disposición, la autoridad municipal declarará mostrencos a los porcinos, procediendo a su sacrificio inmediato conforme a lo que establecen los artículos 51 a 54 de la Ley de Ganadería del Estado de Colima”. El artículo 7º, dice: “Que cualquier persona que se dedique a producir ganado porcino en pie, venta de carne en canal o procesado para su comercialización en el Estado, se obliga a registrarse ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.”

El artículo 8° “Se establece que el horario para movilizar o introducir dentro del Estado ganado porcino y su transporte, será de las siete a las diecinueve horas”. El artículo 9°, ya sabemos que está derogado.

El artículo 10°, dice: “Que el gobierno del Estado previo dictamen de este Subcomité, podrá en cualquier momento rechazar el ingreso a la entidad de porcinos que presenten enfermedades, etcétera”.

Creo que aquí, efectivamente este Decreto lo que está estableciendo, no son condiciones de coordinación en la vigilancia sino está estableciendo requisitos materiales; y veo también lo que decía el Ministro Ortiz, claramente una acción que está buscando proteger a los productores del Estado, como nos pasó hace algunos años con un asunto que tuvimos sobre producción de huevo — recordarán ustedes— y de pollo, en alguna entidad federativa, bajo el pretexto de que se están introduciendo medidas de protección sanitaria o algún otro tipo de consideraciones.

Creo —insisto— que con independencia de que esté este Convenio, la forma misma en que está redactado el Decreto impugnado, lo que está introduciendo no son elementos de coordinación para la vigilancia sino elementos normativos que exclusivamente puede establecer la Federación en términos del primer párrafo del artículo 67.

Entonces, aun en ese caso, y me parece muy importante discutir este asunto que plantea el Ministro Franco, creo que aun así, la acción tomada por el gobernador del Estado fue mucho más allá de lo que el propio artículo 67 autorizaría a realizar. Por esas razones, sigo estando de acuerdo con la parte resolutive del proyecto, aun cuando no con todas las consideraciones que se expresan en el proyecto. Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío. Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Ministro. Creo que se han planteado aquí dos cuestiones muy sugerentes sobre las cuales habría que pronunciarnos, una primera muy relevante la plantea el Ministro Ortiz Mayagoitia, y entonces dice: —si es que no lo entendí mal— Como de la Ley Federal de Sanidad Animal, no ha habido un pronunciamiento del Pleno sobre su constitucionalidad, no es conveniente hacer esta confronta del Decreto con esta ley por dos razones: Primera, porque estaríamos avalando la constitucionalidad de una ley que no se ha discutido. Y, en segundo lugar, porque no hay razón para preferir una ley federal frente a una legislación local.

Me parece que este es un tema sobre el que hay que pronunciarnos, porque después el Ministro Ortiz Mayagoitia nos dice: En virtud de que no podemos hacer esto, entonces veámoslo desde el punto de vista de limitaciones al comercio. Y me parece que estamos —para dar la vuelta a esta legislación— tratando de encontrar forzosamente una cuestión de comercio interestatal, que creo que no es la esencia del Decreto.

Podríamos pensar, creo, tengo la impresión de que lo que busca es restringir el comercio, privilegiar la producción de puerco local, pero la verdad es que, al menos no tengo ningún indicio que me pueda llevar a esa conclusión; lo que sí veo es un Decreto que incide claramente en sanidad animal; y entonces estimo, que no estaríamos nosotros en presencia de preferir una ley federal frente a una legislación local, lo que creo es que la sanidad animal es parte de la salubridad general con esta facultad que tiene el Congreso para determinar de manera concurrente las competencias.

Y tendría dos argumentos para ello: Primero, el artículo 2° de la Ley General de Salud que en su fracción XXII establece como materia federal, el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación. Pero también creo, que la Ley Federal de Sanidad Animal aunque no esté formalmente constituida como ley general en el sentido que el Pleno la ha previsto como una ley inmediatamente abajo de la Constitución que distribuye competencias —una ley marco se le ha dicho en otras ocasiones— creo que esta Ley Federal de Sanidad Animal, por un lado desarrolla el marco normativo de la Ley General de Salud, pero también distribuye competencias y creo que también tiene facultades el Congreso para hacerlo con base en su atribución para legislar en materia de salubridad general de la República.

Yo creo que hacer este análisis sobre el Decreto con la Ley Federal de Sanidad Animal es correcto y no implicaría que estemos haciendo un pronunciamiento concreto o específico de la validez de toda la ley, simplemente estamos estableciendo este marco normativo que prevé la misma ley para resolver el asunto; y en este sentido yo sí creo que el tema es de salubridad general, específicamente de sanidad animal, y que aquí se debería hacer el análisis; y no estimo que sea una cuestión de limitaciones al comercio.

Por el otro lado, nos dice el Ministro Franco algo que también me parece muy interesante: Hay un convenio firmado entre el Estado y la Federación para esta cuestión y habría que ver con cuidado qué facultades de este convenio, porque es cierto que el artículo 67 de la Ley Federal de Sanidad Animal parece que distingue claramente dos cuestiones diferentes, como lo decía el Ministro Cossío: Primero —en su primer párrafo— la cuestión de la prohibición a las autoridades estatales o municipales para exigir mayores requisitos;

y segundo, donde permite la coordinación es realmente nada más para la vigilancia de las medidas que ya tomó la Federación.

Yo creo que difícilmente podríamos considerar que el establecimiento de mayores requisitos pudiera ser una facultad que se disuelva en el cumplimiento de la vigilancia de las instrucciones que aparentemente —me da la impresión, del texto de la ley— la facultad de decisión es de la autoridad federal, se ayuda de las autoridades locales para la vigilancia de estas medidas, de tal manera que partiendo de estos dos supuestos, que sí creo que tenemos que ver la distribución competencial de la Ley de Sanidad Animal; y segundo, que creo que el convenio en su caso sería simplemente para la vigilancia del cumplimiento de las medidas, creo que el Decreto en principio es inconstitucional.

Si bien es cierto que siendo muy puristas podríamos analizar artículo por artículo del Decreto, y hay algunos que de manera aislada podrían no significar mayores requisitos, lo cierto también es que no pueden subsistir aisladamente, quedaría algo realmente sin sentido normativo, de tal manera que yo también me pronuncio por la inconstitucionalidad de este Decreto, si bien con argumentos distintos a los que tiene el proyecto, porque creo que sí estamos en un problema de sanidad animal que forma parte de la salubridad general de la República, y que es facultad —estas atribuciones que se está otorgando el Estado— exclusiva de las autoridades federales. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Zaldívar. Señora Ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Sí, Gracias señor Presidente. Yo estoy en favor del proyecto, creo que el proyecto contiene los dos argumentos, si bien no con tanta nitidez como lo

están mencionando los señores Ministros sí los contiene. En primer lugar, porque si en el fondo lo que pretende el Estado de Colima es proteger a los productores locales, lo cierto es que existe esta Ley – como ya se ha dicho– Federal de Sanidad Animal expedida por el Congreso de la Unión en ejercicio de estas facultades, en la que se establecen con toda claridad las reglas a que deben sujetarse quienes movilicen mercancías dentro del territorio nacional; y en su artículo 67 que ya muchas veces se ha leído durante esta sesión, señala que precisamente las autoridades estatales o municipales no podrán exigir mayores requisitos que los establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el mismo proyecto lo establece y por lo tanto, va en ambos sentidos.

También el proyecto establece que incide obviamente en la libertad de comercio del artículo 73, fracción IX, y que por supuesto también viendo desde esta óptica es inconstitucional el Decreto ya que establece que también el Congreso tiene la facultad para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan mayores restricciones —o restricciones— y por eso yo creo que el proyecto en sí abarca estos dos aspectos, es bastante completo, yo estaría básicamente en favor de toda la argumentación que se establece dentro del proyecto y a mí me parece que es inconstitucional el Decreto por estas dos razones que el proyecto ya contiene. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Una aclaración del Ministro Ortiz Mayagoitia.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Ciertamente señor Presidente una precisión, creo que el señor Ministro Zaldívar interpretó muy bien lo que yo dije, sólo quiero destacar que me referí a la constitucionalidad no de toda la Ley de Sanidad Animal

sino del artículo 67, en la parte que establece como facultad exclusiva de la Federación.

Pero mi coincidencia es también que el caso concreto es de salud humana y para esto di como argumento el contenido del artículo 10 de la propia Ley de Sanidad Animal que dice: En los casos de enfermedades, plagas de los animales o residuos ilegales o que excedan los límites máximos establecidos por esta ley y demás disposiciones de sanidad animal, en los bienes de origen animal que puedan afectar la salud pública —Aquí está el quid— no todos los bienes de sanidad animal tienen esta trascendencia a la salud pública, pensemos en mascotas, en perros en estos que normalmente no tienen esta afectación, en cambio los que están destinados a la alimentación humana con toda seguridad hay incidencia en la salud pública y aquí este precepto 10 dice que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo y Pesca se coordinará con la Secretaría de Salud para el establecimiento y ejecución de las medidas sanitarias, la Secretaría de Salud será la responsable para coordinar las acciones encaminadas a controlar o erradicar el riesgo a la salud pública.

Entonces, finalmente llego a la misma conclusión, no creo que todo el tema de salud animal sea un tema de salud pública, pero en el caso concreto sí lo es, dado que son cerdos o cárnicos destinados a alimentación humana y sumo los dos factores, no consta la intervención de la Secretaría de Salud y por otra parte, las medidas adoptadas sin lugar a dudas contienen restricciones a la actividad de comercio. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Ortiz Mayagoitia. Señor Ministro Pardo Rebolledo.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias señor Presidente, yo de inicio tampoco comparto toda la estructura argumentativa del proyecto porque finalmente se hace derivar la invalidez de los preceptos reclamados de la violación al artículo 117 —me parece— en la fracción donde establece que los Estados no pueden prohibir ni gravar el comercio de mercancías en su territorio.

A mí me parece que no estamos en esa hipótesis, porque no hay una prohibición tampoco terminante y el tema de gravar esas actividades pudiera ser cuestionable con los artículos que fueron derogados e incluso que se suprimió el costo por la revisión de los animales, en fin.

A mí me parece que haciendo el contraste del Decreto reclamado directamente con la Constitución, pues desde luego tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 4º, ahí se dispone la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general y aquí ya se ha dicho que el tema que forma parte de este Decreto si bien está referido a temas de sanidad animal impacta en temas de salubridad general porque también puede tener repercusión en la salud de las personas que consuman ese tipo de alimentos o de carne.

Ahora bien, en la Ley General de Salud, partiendo de la base de que el 4º constitucional establece la concurrencia, en la Ley General de Salud en el artículo 1º se reitera también esta concurrencia entre la Federación y las entidades federativas y en el artículo 3º ya se hacía referencia a esto, se establece en la fracción XXII actualmente —ya lo señalaba el Ministro Franco— que es materia de salubridad general (fracción XXII) el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

Buscando la norma reglamentaria sobre este punto, en el artículo 1º del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en la fracción III se establece. Dice: 1º. El presente ordenamiento tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, relacionados con los productos siguientes: Fracción III. Carne y sus productos”.

“Los productos, establecimientos, actividades y servicios regulados en el presente Reglamento, se refieren a los de uso y consumo humano, excepto cuando expresamente se refiera a otros”.

El artículo 13, Apartado A, de la Ley General de Salud, cuando hace la distribución de competencias, dice: La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: Fracción II. En las materias enumeradas en las fracciones —señala varias, entre ellas la fracción XXII que acabo de leer— fracción III de esta ley. Organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud.

El tema de organizar y operar, me parece que es exclusivo de la Federación. El tema de la vigilancia —ya se leía en la propia Ley Federal de Sanidad Animal— puede ser materia de coordinación por disposición expresa del propio artículo.

Así es que no comparto el que haya violación al artículo 117, fracciones IV o V, sino que este tema del control de los productos que puede ser, o tener impacto en la salud humana por el tema de salubridad general, por disposición expresa de la Ley General de Salud, pues es de competencia federal exclusivamente.

Ahora, también entiendo: Si hay algún problema local —por llamarlo de alguna manera— si en el Estado de Colima —digámoslo así— tienen un problema con este tipo de enfermedades, la fiebre porcina clásica y la “enfermedad de aujeszky”, desde luego que necesitan tomar acciones para impedir que estas enfermedades puedan impactar en la salud humana, pero me parece también inevitable que tengan que acudir a la instancia federal a fin de establecer estas medidas necesarias para combatir estos problemas que pudieran estar localizados en el territorio de algún Estado.

Así es que también por estas razones llego a la conclusión de la invalidez del Decreto reclamado —insisto— sin compartir la afirmación de la violación del artículo 117 en sus fracciones IV y V. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Pardo Rebolledo. Señor Ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor presidente.

No sabe qué contento estoy, todos, salvo el señor Ministro Sergio Valls, todos con muy buen sentido, están a favor del proyecto. El señor Ministro Valls, está frontalmente en contra del proyecto, pero resulta que los que están a favor del proyecto, lo tienen más “abollado que un taxi de la Estación Tapo”.

Muy bien. La crítica más severa que ha recibido el proyecto es que se involucre el artículo 117 de la Constitución General de la República. Voy a estar de acuerdo con ustedes en que se excluya toda mención al artículo 117, si la señora Ministra Sánchez Cordero me apoya en esto, pero es que tenemos algún precedente en este sentido o un par de precedentes. Alguno que por registro lus tiene

131,223 que es una jurisprudencia o tesis aislada —bueno, pues es igual—.

En su texto dice: Comercio Interior. El Decreto que declara de interés público las acciones tendentes a proteger y garantizar la sana movilización de productos del campo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el siete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, transgrede el artículo 117, fracciones V y VI de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y viene diciendo que por acuerdo de las asociaciones locales correspondientes se grava, hay campañas de sanidad, de promoción, de consumo de los productos en el Estado de Colima, y al fortalecimiento de organizaciones, etcétera, son los fines de la ley, transgrede el artículo 117, fracciones V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las prohibiciones de carácter absoluto que consigna para los Estados de la Federación, esto es, la relación con la referida fracción V al establecer cuatro prescripciones para las entidades federativas, a saber. Primero. La entrada al territorio del Estado de mercancías provenientes de otra entidad federativa sean nacionales o extranjeras. Segundo. La salida del Estado de cualquier mercancía nacional o extranjera. Tercero. Gravar directa o indirectamente la entrada al territorio del Estado mercancías, sean nacionales o extranjeras, solamente te reviso de tales a tales horas. Solamente en los puntos que yo establezca previamente.

Esto si no en un sentido exacción fiscal es un gravamen y una molestia, yo diría que es un gravamen indirecto. Cuarto. Gravar indirectamente la salida del territorio de la entidad de mercancías nacionales o extranjeras, se transgrede en tanto que al condicionar, etcétera. Otra similar.

No tengo ningún problema, les decía, en excluir el artículo 117, de toda consideración en la especie, ¿para qué? Si están las fracciones IX y X del artículo 73, se va a decir: ¡Ah, pero no es lo mismo regular que restringir, a ver entendámonos, siempre que hay una regulación hay algún sometimiento de la libertad a ciertos haceres o no haceres, y desde este punto de vista toda norma tiene por esencia una restricción a la libertad, no me refiero a eso en el proyecto, sino a situaciones específicas restrictivas por el Estado a la libertad de tránsito, de mercancías, en este caso, cerdo en sus varias presentaciones.

Yo creo que el Ministro Zaldívar lo decía bien, esto es proteccionista a todas luces, pero la cuestión del caso es detectar por qué se es proteccionista y en ese empeño estamos. Me acuerdo muy bien de algún jurista que decía: Yo sé identificar la pornografía en cuanto la veo, pero no me pongan a definirla, éste es otro tema. Alguien decía: La Capilla Sixtina tiene puros desnudos humanos y es pornografía, alguien dijo: No, no se están moviendo.

Total es muy complicado definir esto, tanto la pornografía cuanto normas cuyo fin básico es el proteccionismo de cierta actividad en un Estado, fuera el artículo 73, lo compro, ¿para qué? Digo, fuera 117, queda 73, fracciones IX y X, lo cual no se contrapone con estimar salubridad general, la carne de cerdo en el tema del Decreto impugnado.

¿Por qué? porque es para el consumo humano y para otros fines; decía un porcicultor que lo único que se desperdicia del cerdo es el chillido cuando lo matan, se utiliza para muchas cosas el cerdo pero básicamente para el consumo humano, y tenía razón el Ministro Ortiz Mayagoitia al decirme: Momento, no todos los cárnicos entran en esto, ¡no! normalmente no nos comemos a nuestras mascotas, ni a los perritos, ni a otro tipo de animales que tienen un contenido

cárnico, pero qué quiero decirles a los señores Ministros, todos han hecho aportaciones valiosas para que el proyecto quede muy adecuado, yo recogeré de sus intervenciones lo más apropiado para esto y en caso de ser aprobada la parte propositiva donde parece que solamente uno viene en contra, me comprometeré con todos los señores Ministros bajo estos dos pilares a presentarles un engrose que espero resulte satisfactorio y si no, lo comentemos. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Aguirre. Señor Ministro Luis María Aguilar, luego el Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias señor Presidente.

Agradezco al señor Ministro ponente que haya accedido ya a eliminar las argumentaciones en relación con el artículo 117 que como hemos visto no es realmente posible sostener el criterio de inconstitucionalidad en relación con dicha norma constitucional, veo que estamos urdiendo mucho el tema en relación con la cuestión de la sanidad humana, aquí hay dos aspectos de la sanidad, tanto la cuestión de la salud humana, como la de la sanidad animal propiamente que está en otra ley, en una ley distinta, pudieran ser muchas circunstancias que la sanidad de un animal aunque no estuviera relacionada directamente con la salud humana, de todos modos fuera importante porque es una mercancía que se puede utilizar en el comercio de distintas formas, desde aprovechar alguna de las partes de los animales para cuestiones no sé, de vestimenta, hasta médicas, en fin de mucho tipo, inclusive de abono, de muchas cuestiones más allá de la salud animal o consumo directo para los humanos. Coincidiendo inclusive con el dictamen o la opinión que previamente nos hizo favor el Ministro Presidente de mandar, de que hay una concurrencia en estas materias, aun con ello lo decía

en mi intervención anterior, lo que veo aquí es que sí hay una restricción al comercio, si sólo se tratara de establecer puntos de verificación zoonosanitaria, y de establecer que determinada mercancía como en este caso la de origen porcino pudiera ser nociva en cualquier campo ya sea de la salud humana o propiamente en el animal, yo estaría de acuerdo en que esta cuestión no la hace inconstitucional, sólo desde ese punto de vista; aquí lo que hace la norma es que no se limita simplemente a establecer o hacer notar, o a determinar las condiciones de salubridad de esta mercancía, lo que está haciendo es impedir la introducción y circulación de esta mercancía en el territorio de un Estado, eso es para mí lo relevante y eso es a lo que se refiere la fracción IX del artículo 73 constitucional, más allá de que solamente se pudieran hacer cuestiones de observaciones de salubridad o de sanidad animal, para mí está la cuestión de la limitación en la circulación de esta mercancía por cualquier Estado, en este caso el de Colima, si se hiciera nada más un control sanitario en el que se hicieran valer inclusive normas concurrentes o normas de la Federación en relación con que no se cumplan los requisitos, yo estoy de acuerdo, que no se pudiera vender, que no se pudiera hacer comercio en las tiendas, en los lugares destinados para ello, aquí lo que se impide y eso para mí es lo que queda muy claro en la fracción IX del artículo 73, es la libre circulación de las mercancías en un Estado, no se puede, no se permite, así lo dice expresamente el Decreto, dice: "Sin la presentación de este permiso -del propio Estado, no de la Federación- no podrá ingresar a territorio estatal, ninguna cabeza de ganado o canal porcino" Entonces, para mí, la infracción, más allá de una cuestión de salud o sanitaria, está en el impedimento en esta disposición de comercio o la libertad de comercio, estableciendo restricciones que el Estado no puede imponer, porque así lo quiso el Constituyente en el artículo 73 de nuestra Constitución, y por eso yo insistiré en que desde ese punto

de vista estamos ante una norma inconstitucional. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Luis María Aguilar. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias señor Ministro Presidente.

Bueno, yo lamento tener que de alguna manera corregir un poco el comentario del señor Ministro ponente, porque yo no me he pronunciado a favor del proyecto, de hecho planteo una duda que sigo manteniendo, y la seguiré manteniendo por lo siguiente – insisto– no me voy a detener en esa parte, no creo que sea un problema de comercio, esto cae en materia de salubridad general y de sanidad animal, y si fuese el caso de la fracción IX entonces tampoco la Federación podría establecer ninguna norma de control o de restricción en relación con los Estados porque la fracción dice: “impedir que haya restricciones entre Estado-Estado”, entonces, no me voy a detener en ese tema, tengo la convicción de que no es un problema de comercio que se inscribe en salubridad general y sanidad animal, esto está muy estudiado, hay que leer los considerandos del propio Decreto que dan —digamos— la guía de qué es lo que se pretende.

Yo sí creo que se pueden establecer restricciones en esta materia en función de la posibilidad de riesgos reales que hay con el manejo de ciertos productos, hay productos que tienen más riesgo que otros ¿verdad? Y en el caso concreto siempre ha sido un tema de especial cuidado, el producto de carnes y en específico la carne del puerco por sus características, consecuentemente yo sí creo que esto cae dentro de esa protección que existe en materia de salubridad general y particularmente de sanidad animal en función,

también de los efectos que puede tener sobre la salud humana, pero también en relación a los riesgos que conlleva de lo que pudieran generarse otro tipo de problemas, entre el propio grupo pecuario al que se refiere o con otros animales, porque esto no nada más es un problema estrictamente de salud humana, tiene muchas otras características y muchas otras cuestiones que están involucradas.

Ahora, por qué sigo insistiendo en mi duda y que lo tendríamos que ver con cuidado; hasta ahorita, entiendo que nadie se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud ni de la Ley Federal de Sanidad Animal, y consecuentemente creo que el punto fundamental es la cadena normativa que se establece.

La Ley General de Salud establece como facultad del gobierno federal por conducto de la Secretaría de Salubridad y en coordinación con todas las demás dependencias, entre otras SAGARPA y entidades que tienen que ver con esto que se refiere a este tipo de productos, la Ley de Sanidad Animal —insisto— establece al regular, y por eso creo que le pusieron Ley Federal de Sanidad Animal, establece que la Secretaría de Salud como la rectora en la materia puede establecer acuerdos o convenios con las entidades federativas, hay un acuerdo específico de coordinación con Colima, en ese Acuerdo —yo no me detuve— en el que establece las condiciones en que la Secretaría de Salud como rectora en la materia y el Estado de Colima, establecen una coordinación, inclusive el Acuerdo habla de concurrencia y en donde se establecen qué facultades le corresponden a cada orden de gobierno y trae dos anexos: Uno. Criterios de Atención para la Participación de las Entidades Federativas en Materia de Control y Fomento Sanitario; y un segundo anexo que se refiere —perdón lo encuentro en un momento— a Criterios de Atención para la Participación de las Entidades Federativas en Materia de Trámites de Productos, Actividades y Servicios; estos dos anexos —si los

ven— este Acuerdo está publicado —insisto— en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cinco, y hasta donde entiendo y ahí está mi duda, no ha sido ni derogado ni abrogado, es una duda, así lo plantee desde el principio, pero me parece que deberíamos atender esto. En estos anexos vienen cuadros en donde se señalan precisamente los lineamientos de la Secretaría de Salud que deben cumplir conforme a los respectivos rubros, y viene: Corte y empacado de carne, producción de embutidos y conservas de carne, producción de alimentos preparados congelados, y etcétera; consecuentemente yo no me atrevería a afirmar que lo establecido en el Decreto pugne con estos lineamientos que fija la Secretaría de Salud y que está autorizando al Estado, concretamente de Colima, a llevar estos trámites; por ejemplo, en cuanto a la vigilancia sanitaria regular, esto es para el Estado, dice: Las visitas de verificación, dictamen, modificación, seguimiento de corrección de irregularidades, resolución y en su caso seguimiento jurídico, lo realizarán las entidades federativas bajo la política de lineamientos y procedimientos que emita COFEPRIS, y viene el cuadro en donde están, para cada uno de los productos, los criterios. Posteriormente en el control hay una cuestión similar en donde se le confiere o se le delega a la entidad federativa la realización de estas actividades, entre otras, la de verificación, la de solicitar licencias, está expresamente señalado.

Yo insisto, y me mantendré en esa posición, que no puedo emitir un voto a favor del proyecto si no hacemos el análisis encadenado normativamente y se verifica si el Decreto efectivamente viola el acuerdo celebrado entre el gobierno federal y la entidad, que es lo que rige, en mi opinión, en este caso concreto ¿Por qué? Por disposición de las leyes aplicables.

Consecuentemente esa es mi posición, la reitero con una disculpa al ponente, porque si no lo dije claramente, ahora lo digo: No estoy

a favor del proyecto, porque considero que debería hacerse este estudio. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Sumo dos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Agradezco que me haya omitido, porque en un principio yo circulé un documento precisamente no estando de acuerdo con el proyecto, comparto ahora el argumento de refuerzo del señor Ministro Franco, en tanto considera que estamos frente a una concurrencia pura y dura si se trata de animales exclusivamente. Creo que la línea tenue aquí que nos maneja de un lado para otro es el involucrar el tema de la salud humana, ya eso lo convierte en efecto en salubridad general, salud pública, de acuerdo, pero si estamos hablando exclusivamente de animales, parecería que inclusive dándole seguimiento a los precedentes de este Tribunal Pleno existiría esa posibilidad de esa concurrencia: Federación en esto, el Estado en esto ¿Qué hace el Estado? El Estado sí, de manera preventiva en caso de enfermedades porcícolas, establece restricciones, no se involucra la cuestión humana, desde ese punto de vista parecería que habría que estar en contra del proyecto en tanto que sí tendrían validez constitucional las normas que se impugnan.

Ya cuando entre el tema que sí es materia de estudio, vamos en el dictamen que nosotros circulamos, las disposiciones del artículo 10 donde frente a esa posibilidad de afectación de la salud humana, entonces ahí sí nos vamos a la concurrencia coordinada; esto es, para que participe la Federación en relación a la vinculación que se tiene con salud humana. Si hablamos exclusivamente de esto, y esa es una duda que sí surge y es una duda razonable, en tanto que los productos porcícolas cárnicos pueden incidir en la salud humana;

esto es, la distribución, la entrada libremente no restringida y ahí viene la duda del señor Ministro Franco ¿Hasta dónde alcanza este convenio de coordinación para esos efectos?

Ahora, aquí en el caso concreto sí se presenta esta situación y a mí sí me produce y me ha producido duda esa posibilidad del 10º, porque la posibilidad del artículo 10º trae a la presencia federal en automático. ¿Por qué? Porque entonces sí es un problema de salubridad general, de salud pública, tendría que entrar la Federación frente a la posibilidad del artículo 10. Si exclusivamente hablamos de sanidad animal como tal, es perfecta, constitucionalmente válida, —pienso— las disposiciones que se están impugnando. Si lo abrimos con esa posibilidad del artículo 10 así como tal, a la posibilidad de afectación a la salud humana, entonces sí estamos en otro esquema. Ésa es la duda que a mí me ha generado esta plática del día de hoy —debate— en función de una determinación con certeza, con rigor técnico, frío, duro, técnico, sin aludir a la naturaleza de los animales en circulación, no tendría yo absolutamente ninguna duda, tratando de ser productos que puede ser de aprovechamiento alimentario, del hombre, ya existe ese riesgo que actualiza la participación de la Federación, en un acto de concurrencia o de coordinación para estos efectos de regulación.

Eso me hace a mí, matizar o variar por el caso concreto, por el tipo de animales de que se trata, si fueran otros así como decía el Ministro Ortiz Mayagoitia —ya no digamos mascotas, etcétera— otro tipo de situaciones que no produjeran esto, en tanto esto sí es para consumo humano, entre otros muchos aprovechamientos, estaría yo por estar, desde luego no con el artículo 117, no con la cuestión del comercio, sino vinculado con el tema de salubridad general como se está manejando, si esto es así yo votaría con el proyecto.

Si no hay alguna otra participación, tomamos una votación a favor o en contra del proyecto. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Nada más, simplemente señor Presidente para precisar porque entiendo que el Ministro ponente estuvo de acuerdo en no introducir el artículo 117, pero sí la fracciones IX y X del artículo 73, como base del proyecto. Gracias.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Tomo votación señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Con el proyecto ajustado en la forma en que lo manifesté.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Estoy de acuerdo con la invalidez del Decreto impugnado, por considerar que se viola lo dispuesto en términos generales la fracción XVI del artículo 73 constitucional; es decir, el Gobernador del Estado de Colima invadió las atribuciones de la Federación —sintetizando— en materia de salubridad general de la República.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Creo que están involucrados los artículos 4º y la fracción XVI del artículo 73 en este caso, y voto en contra del proyecto por las razones que he expresado, dado que creo que para declarar la invalidez se tendría que hacer el análisis en la cadena normativa hasta llegar al Decreto. Gracias.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Por la invalidez, pero exclusivamente por los argumentos que tienen que ver con salubridad general de la República y sanidad animal, y en contra de las consideraciones que involucran problemas de comercio. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: En los mismos términos.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Yo también por la invalidez, pero por las restricciones al comercio prohibidas en el artículo 73 fracciones IX y X de la Constitución Federal.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: En contra, por las razones que expuse.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Estoy a favor del proyecto modificado, con los ajustes que nos acaba de manifestar el señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: En favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: En favor del proyecto con la modificación que hará el señor Ministro Aguirre Anguiano y dejando a salvo el derecho de formular un voto concurrente.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor de la propuesta consistente en declarar la invalidez del Decreto impugnado con las salvedades de los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Pardo Rebolledo en el sentido de que el Decreto impugnado únicamente implica una invasión a las facultades de la Federación en materia de salubridad general.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: BIEN, CON ESE RESULTADO, HAY DECISIÓN, POR LA INVALIDEZ CONSTITUCIONAL.

Y faltaría precisar los efectos. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Presidente. Hasta este momento quiero manifestar que haré mi mejor esfuerzo por hacer el engrose que congenie hasta donde es

posible los puntos de vista de los señores Ministros; hay algunos que estarán de acuerdo con algunos de los estudios que se hagan y no con los restantes, pero esto finalmente compatibiliza la decisión si encuentran una causa de inconstitucionalidad que ellos consideraran apropiada dentro del engrose; haré mi mejor esfuerzo.

Ahora bien, respecto a los efectos, pienso que todo el Decreto debe de quedar sin materia, digo, debe de estar expulsado del orden jurídico y debe de surtir plenos efectos a partir de la notificación que se haga de esta decisión en los resolutivos, por eso, a partir de la notificación de los resolutivos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De acuerdo, o sea la notificación de los resolutivos.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: En el entendido de que a la brevedad se hará el engrose correspondiente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Sí, Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Nos recuerdan el encorchetamiento de la improcedencia.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: ¡Ah claro! Yo creo que si se cae todo el Decreto, se cae todo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Exacto, ya nada más para efecto de no dejar volando este tema encorchetado, en este momento se desencorcheta en función de la decisión. Sí señor Ministro Pardo Rebolledo.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Pero es que, por ejemplo el artículo 9° fue derogado integralmente. Cómo podríamos invalidarlo.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Simplemente. Yo creo que queda fuera del orden jurídico todo el Decreto en lo vigente, en lo no vigente ya para qué.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Es decir, viene un considerando para sobreseer, y en los temas en que viene el considerando yo estoy de acuerdo. El 9 queda excluido porque fue derogado, el 5 queda excluido solamente en la porción normativa, y la declaración de invalidez ya lo comprende a todo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Que en eso consiste la figura del desencorchetamiento. De acuerdo, hay decisión en esta controversia.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Entonces subsiste el considerando del tratamiento del sobreseimiento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, decíamos: **HAY DECISIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2009.**

Continuamos señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 143/2008. PROMOVIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LA INVALIDEZ DE DIVERSOS PRECEPTOS DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA INSPECCIÓN SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Bajo la ponencia del señor Ministro Aguirre Anguiano, y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA LA PRESENTE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

SEGUNDO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO 4.1 DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA INSPECCIÓN SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, CON FECHA DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO.

TERCERO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1°, 2°, 4.2, 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 15, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 37 Y 40, HACIÉNDOSE EXTENSIVA A LOS NUMERALES 3, 6 Y 11, TODOS DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA INSPECCIÓN SANITARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, CON FECHA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO, y

CUARTO. PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, Y EN LA GACETA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DEL PROPIO ESTADO.

NOTIFÍQUESE; "..."

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Señora y señores Ministros, les recuerdo a ustedes que este asunto ya había sido motivo de análisis, tenemos aprobados los considerandos del Primero al Octavo y estacionados en el Noveno. Le doy la palabra al señor Ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Ministro Presidente, sabiendo de mi falible memoria pedí en mi ponencia me apoyaran con una ayuda escrita. Voy a participárselos a ustedes, muchos de ustedes no lo necesitarán, lo sé de fijo, pero quién quite.

Conforme a lo acordado en la sesión de nueve de febrero del presente año, les informo lo siguiente: "Se considera improcedente declarar la invalidez de todo el Reglamento impugnado". Fue el paréntesis que abrimos, porque me tomó un poco mal parado la sugerencia del señor Ministro don Sergio Valls Hernández que me pidió que explorara en la especie y con mucho gusto lo hice.

Creo que no procede hacerlo, voy a explicar por qué. El Poder Ejecutivo actor sólo demandó la invalidez de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 37 y 40, en el proyecto se declara la invalidez de los preceptos impugnados con excepción exclusivamente del inciso 1º) del artículo 4º, extendiéndose tal declaratoria de invalidez a los artículos 3, 6 y 11, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su validez depende de las normas que han quedado invalidadas.

La validez de los demás preceptos del Reglamento: 9, 13, 14, 16 a 23, 26 a 31, 35, 38, 39, 41 a 47, esto es un total de 27 artículos, no depende de las normas declaradas inválidas pues su objeto de regulación subsiste por sí mismo en tanto se refieren a materias de competencia municipal, como lo es el servicio de rastro, conforme al artículo 115, fracción III, inciso f) constitucional, concretamente a las obligaciones y atribuciones que el artículo 17 de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco, establece para los inspectores de ganadería municipales. Artículo 9. En la inspección *post mortem* de toros de lidia sacrificados en las plazas. Artículo 13. Las medidas sanitarias y de inspección aplicables a rastros, las responsabilidades de los médicos veterinarios zootecnistas asignados a los rastros, entre otras, la de dar aviso a las autoridades sanitarias competentes cuando en los animales a sacrificar aparezcan enfermedades que afecten la salud pública. Artículos 14, 16 a 23 y 26 a 31. Las sanciones e infracciones y procedencia y trámite del recurso de revisión. Artículos 35, 38, 39 y 41 a 47. El artículo 2º del Acuerdo del Ayuntamiento en que se aprueba el Reglamento controvertido, dispone que se derogan los artículos 78 a 109 del Reglamento del Rastro en el Municipio de Guadalajara, preceptos que integraban el Capítulo VI denominado “De la inspección sanitaria”, pasando así a la regulación de la inspección sanitaria de rastros al Reglamento impugnado. Por tanto, en caso de extenderse la declaración de invalidez a los demás artículos del Reglamento que no fueron impugnados, se dejaría sin regulación la inspección sanitaria del rastro. En cuanto a los efectos de las normas del Reglamento controvertido que se declaran inválidas, no se advierten graves repercusiones, porque el artículo Sexto Transitorio del Reglamento Interno para la Inspección Sanitaria en el Municipio de Guadalajara, supeditó la actividad para la autoridad municipal que corresponde a las autoridades estatales la suscripción de los convenios correspondientes al disponer expresamente, cito: “Las funciones y atribuciones dispuestas en el

presente ordenamiento cuya competencia corresponda a las Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, quedarán sin efectos para que la autoridad municipal opere en lugar de aquéllas hasta en tanto cuanto se lleve a cabo la suscripción de los convenios correspondientes”.

Consecuentemente, y dado que no se han suscrito los convenios a que se alude, sólo han tenido efectos las funciones de inspección sanitaria que las autoridades municipales desarrollan en lo que a su competencia originaria en la materia, a saber, el servicio de rastro. En tales términos, la declaración de invalidez de las normas impugnadas puede surtir efectos inmediatamente a partir de la publicación de la resolución plenaria.

Esta es la ayuda de memoria que se elaboró, la compartí con ustedes, estábamos discutiendo hasta donde recuerdo el Considerando Sexto, y me pedían una relación de artículos no impugnados, hice un resumen, aquí la tengo por si alguno de ustedes la requiere, la transcripción de los artículos no impugnados con mucho gusto, la mención de los artículos no impugnados, la acabo de hacer, también aquí está la transcripción por si alguno la requiere, está a su disposición.

Y estábamos en la discusión del Considerando Noveno, perdón, dije el Sexto, pero es Noveno cuando suspendimos la discusión de este asunto. Esto corre de las páginas ciento cuarenta y uno a ciento setenta y seis creo, y creo que ya no nos faltaba más en la discusión salvo este paréntesis que se hizo por la muy interesante sugerencia de nuestro colega, no sé si le satisface la explicación que doy, pero deben de pervivir esas normas. Gracias Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Aguirre. Está a su consideración. Sí, efectivamente recordamos, se vino

discutiendo e inclusive había un planteamiento de que la invalidez alcanzara todo, y ahí vino la sugerencia de que se analizara por parte del ponente, inclusive, adelantamos un receso, en fin, para efectos si era el cotejo, y ahora se nos presenta en esta nota informativa ese análisis, el cual queda a su consideración. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Yo estoy de acuerdo con el proyecto, aquí sí se trata de aplicar las cuestiones de salubridad y de sanidad, y las competencias concurrentes, la necesidad de los convenios para que el Municipio pueda actuar en estas materias, estoy de acuerdo; pero se hace un estudio correcto y detallado de los artículos 1, 2, 4.2, 5, 7, 8 y 10 impugnados; y sin embargo, no se hace lo mismo en relación con diversos artículos también impugnados, el 12, 15, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 37 y 40, que ya no se hace una mención específica dentro del proyecto, sino que se llevan en lo general, creo que sin mayor dificultad podría hacerse una mención específica de estas disposiciones como se hizo con las iniciales para que el proyecto desde mi punto de vista, sea todavía más claro y específico al respecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Procuraré darle la homogeneidad en los estudios que sugiere el señor Ministro Aguilar Morales, a quien le agradezco su observación.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Hay alguna intervención? Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí señor Presidente, votaré en contra del proyecto por razones similares a

las que ya expresé, me parece que los Estados tienen facultad para legislar en la materia de acuerdo con las normas que ya manifesté: Ley General de Salud, Ley de Sanidad Animal, que tienen participación en esto; y me parece que no se hace el análisis puntual de si estas normas realmente violentan la facultad que tiene el Municipio conforme a leyes estatales en materia de rastro.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Alguna otra participación? Tomamos votación señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Con mi proyecto ajustado en los términos que acepté a lo largo de las discusiones, y quiero aclarar que el señor Ministro Cossío me está pasando un interesante documento con observaciones menores hasta donde he visto muy atendibles, las incorporaré y desde luego circularé el proyecto.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: En contra.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: En los mismos términos.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: También.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: En favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: Con el proyecto modificado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente me permito informarle que existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: HAY DECISIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 143/2008, EN ESOS TÉRMINOS.

Señor Ministro Aguirre Anguiano, en cuanto a los efectos, ¿Cómo quedarían?

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Señor Presidente yo creo que a partir de la publicación, pero puede hacerse a partir de la notificación que se haga de los propositivos, para tener más tiempo para el engrose y la publicación en su caso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Si no hay inconveniente señoras y señores Ministros. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente, nada más para anunciar que haré voto particular en ambos sentidos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se toma nota señor Ministro Franco. Hay decisión —como decíamos— en esa Controversia Constitucional. Decreto un receso.

(SE DECRETÓ UN RECESO A LAS 12:55 HORAS)

(SE REANUDÓ LA SESIÓN A LAS 13:20 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Dé cuenta señor secretario por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al

RECURSO DE QUEJA 8/2011. DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2011. PROMOVIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

Bajo la ponencia del señor Ministro Valls Hernández y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA.

SEGUNDO. SE DECLARA EXISTENTE LA VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, CONCEDIDA MEDIANTE ACUERDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE FALLO.

TERCERO. SE CONCEDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA, PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN, PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE DEJAR COMPLETAMENTE SIN EFECTOS LOS ACTOS DE DESIGNACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE CUATRO NUEVOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, VIOLATORIOS DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL CONCEDIDA EN AUTOS, LO CUAL DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO INMEDIATO DE ESTE ALTO TRIBUNAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA SENTENCIA.

CUARTO. SE DETERMINA LA RESPONSABILIDAD DE LOS ENTONCES PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO DIPUTADOS GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO, MARCO ANTONIO BARBA MARISCAL Y JOSÉ NOEL PÉREZ DE ALBA POR LO QUE SE ORDENA DAR VISTA AL MINISTERIO

PÚBLICO FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTA RESOLUCIÓN.

QUINTO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Tiene la palabra el señor Ministro don Sergio Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. Señora Ministra, señores Ministros en relación con este recurso de queja del que ha dado cuenta el señor Secretario General de Acuerdos, el treinta y uno de agosto de dos mil once, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco interpuso este recurso de queja en contra del Poder Legislativo del propio Estado, por violación a la suspensión que le fuera concedida mediante Acuerdo de veintidós de agosto de ese año, dictado por el Ministro instructor en los autos del incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 90/2011, con motivo de los actos consistentes en la designación y toma de protesta de cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, llevados a cabo en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de agosto siguiente.

En el proyecto que me permito someter a la elevada consideración de ustedes, después de determinar la competencia de este Pleno para conocer del recurso, así como la procedencia, oportunidad y legitimación en su interposición, concluyo que los referidos actos resultan violatorios de la suspensión y que existe responsabilidad por violación a la misma por las razones que expondré al analizar los considerandos relativos de la consulta. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls. Señora y señores Ministros pongo a su consideración la parte considerativa o los considerandos relativos a los temas procesales: El Primero, a la competencia; el Segundo, atinente a la procedencia del recurso; el Tercero, a la oportunidad; y el Cuarto, relativo a la legitimación.

Están a su consideración, si no hay una observación, en votación económica consulto si se aprueban. **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

ESTÁN APROBADOS SEÑOR SECRETARIO TOMAMOS NOTA.

Entramos al Considerando Quinto, ya es el estudio de fondo. Adelante señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias, si usted me permite señor Presidente, en este Considerando Quinto, dividiré la exposición por una parte, primero, por lo que se refiere a la violación a la suspensión y en una segunda parte, a la existencia de responsabilidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Adelante señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Muchas gracias. Con relación a la violación a la suspensión, en el proyecto se determina que en el caso, los actos de designación y toma de protesta de cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco llevados a cabo por el Congreso local en sesión ordinaria del veintitrés de agosto de dos mil once, resultan violatorios de la suspensión concedida por el Ministro instructor mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil once por haberse realizado cuando la medida cautelar estaba surtiendo plenos efectos.

Al respecto, el proyecto señala que la efectividad de la medida suspensiva se actualizó en el momento mismo de su concesión, independientemente de que la autoridad demandada hubiera tenido conocimiento de ella con motivo de la notificación respectiva, o bien, con posterioridad por cualquier causa no atribuible a esta Suprema Corte.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que incluso con posterioridad a la notificación del auto de suspensión, tuvo lugar la designación y toma de protesta, lo que a todas luces se traduce en una evidente violación a la medida cautelar concedida por el Ministro instructor.

En este sentido, se aclara que el desconocimiento de una suspensión legal y oportunamente notificada a las autoridades ejecutoras bajo el argumento de una posible dilación en la atención del acuerdo de suspensión derivada de una deficiencia en la estructura administrativa del órgano al que pertenecen, no resulta atribuible a este Alto Tribunal, y mucho menos salva el que subsistan los actos violatorios de la suspensión concedida, y en su caso, el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar por configurarse desacato de su parte, si al momento de dicha ejecución ya habían sido notificados del auto suspensivo.

Consecuentemente, en el proyecto se propone resolver que tales actos deben dejarse completamente sin efectos, con objeto de dar cabal cumplimiento a la medida suspensiva dictada por el Ministro instructor, para lo cual se concede a la autoridad demandada un plazo de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de la resolución, para que proceda a realizar todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo, lo que deberá hacer del conocimiento inmediato de este Alto Tribunal.

Dicha propuesta se encuentra basada en diversos precedentes que este Tribunal Pleno ha resuelto. Sin embargo, no pasa inadvertido que en el asunto siguiente, el Recurso de Queja 7/2011, de la ponencia de la Ministra Sánchez Cordero, se propone dejar sin efectos desde la sentencia a los actos violatorios de la suspensión, lo cual lo dejo a la consideración de este Honorable Pleno, a efecto de que se determine lo conducente. Hasta ahí dejaría yo este primer punto si me lo permite señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Que aloja las consideraciones del Quinto Considerando ¿Verdad?

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Si hubo o no la suspensión concedida o si deben devolverse las cosas al estado en que se encontraban. Señor Ministro Luis María Aguilar Morales.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Estoy de acuerdo en que hay la violación a la suspensión y como mencionaba el propio Ministro Valls, no estoy en que se le dé un plazo para ver si la autoridad en este caso responsable de esta violación, tome medidas para dejar sin efectos. Creo que como bien se propone en el otro proyecto, es este Tribunal el que puede decidir desde ahorita, que todas las medidas que se hayan tomado en violación a la suspensión, quedan sin efectos por ese solo hecho, sin necesidad de ningún trámite posterior, porque parecería que entonces la determinación de invalidez todavía queda condicionada a su ejecución material por la propia autoridad violatoria de la suspensión. Entonces, en ese aspecto yo estaría porque no hubiera un plazo para que se hiciera ninguna acción por parte de la autoridad. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Luis María Aguilar Morales. Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente.

Yo también estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Creo que se dio la suspensión y tendría simplemente tres observaciones o sugerencias: La primera, hay un argumento de defensa que da el Poder Legislativo que no se contesta y creo que hay que contestarlo, en donde el Poder Legislativo dice que esta designación de los magistrados se hizo con base en un Acuerdo legislativo diferente, el 1060 y el que estaba suspendido era el Acuerdo 1057.

Creo que este argumento es infundado, pero debe contestarse, porque realmente lo que sucede es que la modificación a la convocatoria original, lo que trata de hacer de manera muy clara, pues es un subterfugio precisamente para que no proceda la suspensión, porque se están nombrando los magistrados derivados de la reforma constitucional, pero creo que habría que contestarlo.

En segundo lugar, en relación con la prueba, creo que adicionalmente a la fe de hechos, habría que agregar la página de "Internet" del propio Congreso, donde se establece cómo se desarrolló la sesión, y creo que esto corrobora que efectivamente hubo la suspensión.

Y en tercer lugar, también estimo que quizá lo más conveniente, como ya se pronunció el Ministro Luis María Aguilar, es tomar la medida que se hace en el proyecto que se verá después de la señora Ministra Sánchez Cordero, en el sentido de no dar un plazo,

sino de manera inmediata tenga sus efectos esta medida de la Suprema Corte y deje sin ninguna validez esos nombramientos.

Creo que también sería importante hacer la precisión de que las actuaciones judiciales, que en su caso hayan verificado estos magistrados tienen plena validez, no creo que esto debamos llevarlo al extremo de afectar las resoluciones jurisdiccionales que se han emitido. Con estas observaciones que someto a la consideración del ponente y de este Tribunal Pleno, estoy con el sentido del proyecto, Presidente, gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. En la página treinta, en el último párrafo, más o menos a la mitad, dice: Es claro que tal situación no puede quedar sujeta a condición alguna que no haya sido exigida por el Ministro instructor, como sería en todo caso, el momento en que la autoridad demandada hubiera sido notificada, o bien, el que la misma hubiera tenido conocimiento de ella con posterioridad, por cualquier causa no atribuible a este Tribunal.

Yo sobre este tema, sobre el conocimiento y cuándo empieza a correr el plazo, al resolverse el recurso de queja del incidente de inejecución de la Controversia Constitucional 106/2006, emití un voto particular en el sentido de que no se pueden exigir responsabilidades sin tener un conocimiento preciso de las fechas, esto no afecta en este caso concreto al sentido final de la resolución pero sobre este argumento que está en las páginas veinticinco, veintiséis, treinta, treinta y cinco y treinta y seis, yo sí tengo una opinión diversa y en este punto me apartaría del proyecto estando en lo demás y por lo que se refiere a este Considerando Quinto, de acuerdo con el propio proyecto. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Yo creo que esto que dice el Ministro Cossío es importante, yo no lo veo así en el sentido de que pudieran ser independientes, creo que el dictado de la medida cautelar de la suspensión en ese momento surte sus efectos y debe cumplirse inmediatamente, si se tomaron decisiones contrarias a la determinación de la suspensión, éstas deben quedarse insubsistentes, inválidas y deben desaparecer.

Y otra cosa es la responsabilidad del funcionario, la segunda parte de la responsabilidad del funcionario ya tiene que ver con la notificación o conocimiento que de la medida haya tenido, pero la medida cautelar tiene que cumplirse aun cuando el funcionario no la haya conocido, esto lo único que generaría es que no tuviera responsabilidad por el desacato o aparente desacato, yo creo que en este caso como lo estudia el proyecto sí se dan las dos condiciones, desde luego está tomada la medida, se estableció claramente cuál era lo que debía impedirse que continuara, se hizo, y por lo tanto, como ya se ha comentado habrá que dejar insubsistentes esas determinaciones sobre los nombramientos de los Magistrados.

Y la responsabilidad, para mí también está acreditada porque a través del medio oficial correspondiente, el Congreso fue notificado y están las constancias en autos que se mencionan en el proyecto, y por lo tanto, además de que deban dejarse insubsistentes esas medidas sí se acredita la responsabilidad de quien debió haber evitado que se hicieran esos nombramientos.

Cuando el Ministro Valls dijo que ahorita sólo iba a tratar la cuestión de violación a la suspensión, entiendo que todavía vamos a ver la definición de las responsabilidades, inclusive ahí tendría también alguna observación, pero por lo pronto hasta ahí dejo mi observación.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias. Una aclaración del Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Perdón señor Presidente. Era en el mismo sentido de lo que ha manifestado el Ministro Luis María Aguilar, creo que en este momento estamos discutiendo el Considerando Quinto si hay violación o no a la suspensión, y en su caso, cuáles van a ser los efectos jurídicos de determinar esta violación; y en el Considerando Sexto ahí es donde analizaremos la responsabilidad, creo que no es de ninguna manera incompatible afirmar que hay una violación a la suspensión y después discutir de manera independiente si hay responsabilidad o qué tipo de responsabilidad hay, creo que para mayor claridad porque así viene en el proyecto, quizás valdría la pena ahorita pronunciarnos nada más sobre esta parte y dejar la responsabilidad en donde quizás ahí sí tengamos algunos de nosotros ciertas observaciones. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De acuerdo. Señor Ministro Aguirre, luego el señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias Presidente.

Yo creo que tiene razón el Ministro Zaldívar, creo que los hechos sugieren la violación y ésta está probada; ahora bien, la existencia de la responsabilidad es algo que no podemos hacer en este momento, simplemente por la perpetración de los hechos que

denotan la violación a la suspensión, hay que dar vista al Ministerio Público para que éste ejerza su acción y en su momento se determine la responsabilidad en su caso. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Aguirre Anguiano. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente.

Simplemente para aclarar, tengo muy claro que son dos considerandos, tengo muy claro que uno es un problema de responsabilidad y otro es un problema de conocimiento, no sé a qué se refieran los señores Ministros, eso es precisamente el sentido del voto particular, no me he metido en el Considerando Sexto, ni he analizado el término de responsabilidad, precisamente a esto que estaba yo señalando, en la página treinta es a lo que se opone el voto particular que en su momento emití, de forma tal que cuando analicemos el tema de responsabilidad también tengo algunas cosas que decir del proyecto, pero no me parece a mí que sea posible generar este efecto *erga omnes*, digámoslo así a partir de simple y sencillamente la condición de la emisión del auto de suspensión sin la notificación a las partes, en este sentido está el voto hecho ya hace algunos años, ese es efectivamente el punto al que me he referido, al que quiero insistir y en la parte en que me sigo apartando del proyecto sin haber aludido en absoluto al tema de responsabilidad. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En relación con esta aclaración, creo que sí nos queda claro de que el Quinto Considerando que estamos analizando es la existencia o no de violación y la situación de sus efectos, y después en el Sexto, responsabilidad, conocimiento de responsabilidad ¿Sí? Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente.

Por lo que se refiere a las tres observaciones que formuló el señor Ministro Zaldívar se aceptan y en caso de que este asunto que estoy presentando merezca la aprobación mayoritaria de este Pleno se incorporarían en el engrose; asimismo, la propuesta que nos hace el señor Ministro Aguilar de que los efectos sean de inmediato que también coincide con la tercera de las propuestas del Ministro Zaldívar, de esa misma manera se haría el tratamiento.

El asunto está hecho en base a precedente, yo respeto la posición del Ministro Cossío que ha sido la misma reiterada en todos estos asuntos, de manera que nada más eso quería señalar y por último los temas de responsabilidad que aquí han sido mencionados, los trataremos una vez que esto se haya discutido y aprobado en su caso la primera parte, nada más esas precisiones y muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Valls. Si no hay alguna intervención, someteré a votación precisamente el contenido del Considerando Quinto que es la existencia o no de la violación, y la propuesta del proyecto en relación con los efectos si se comparte o no se comparte, y en el caso como aquí se ha sugerido que sean los que se contienen, o sea, la cuestión inmediata para dejar sin efectos los nombramientos esa es la que ha modificado el señor Ministro Valls y así lo someto a su consideración. Tome la votación con el proyecto modificado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Con el proyecto, con los ajustes que se han anunciado y que reconoció el ponente que los hará.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Yo en general estoy de acuerdo con el proyecto en este Considerando Quinto, excepción hecha de los efectos constitutivos que tiene el mero dictado del auto de suspensión.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto modificado en este punto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Igual.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: También estoy con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: En favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: Con el proyecto modificado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto con las salvedades expresadas por el señor Ministro Cossío Díaz.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: HAY DECISIÓN PUES, CON ESE RESULTADO, EN RELACIÓN CON LOS TEMAS TRATADOS EN EL CONSIDERANDO QUINTO.

Continuamos con el Sexto señor Ministro ponente, responsabilidad.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con todo gusto señor Presidente.

Me referiré a la existencia o no de responsabilidad.

En el proyecto se establece que de conformidad con la normativa local aplicable, correspondía al presidente y a los secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, presentes en la sesión ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2011, tramitar y realizar todos los actos tendentes a dar cumplimiento al auto de suspensión de 22 de agosto de 2011, dado que además de contar con la atribución de conducir la sesiones de la Asamblea, representan jurídicamente al Poder Legislativo del Estado en todo tipo de procedimientos jurisdiccionales incluyendo los relativos a los medios de control constitucional como es la controversia de la que deriva este recurso de queja; contrario a lo anterior, se explica, no realizaron oportunamente ningún acto tendente a cumplir con la medida cautelar en cuestión, pues lejos de mantener las cosas en el estado en que se encontraban el Congreso local designó y tomó protesta, respectivamente, a cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado —incluso— se advierte que el presidente y los secretarios de la Mesa Directiva contaron con el tiempo suficiente para realizar los actos necesarios tendentes a cumplimentar la medida cautelar concedida por el Ministro instructor y no lo hicieron.

En este sentido, el proyecto concluye que en el caso existe responsabilidad por la violación a la suspensión otorgada, en auto de 22 de agosto de 2011 al acreditarse el desacato por parte de los entonces presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, diputados entonces: Gustavo Macías Zambrano, Marco Antonio Barba Mariscal y José Noel Pérez de Alba, quiénes, frente al incumplimiento de mérito, deben ser

sancionados por el delito de abuso de autoridad, en los términos de la fracción I del artículo 58 de la Ley Reglamentaria de esta materia.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 21 de la Norma Fundamental que nos rige, se ordena dar vista al Ministerio Público Federal que corresponda, con copia certificada de las constancias que integran el expediente, a efecto de que ejerza acción penal en contra de los mencionados, entonces diputados, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Alto Tribunal dentro de los diez días siguientes al de su ejercicio.

Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro ponente.
Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias señor Presidente.

Yo veo aquí tres puntos. Primero, el conocimiento de la medida cautelar por los funcionarios o personas que debían acatarla; segundo, la decisión de quiénes son los responsables del posible desacato o ya en el desacato determinado; y tercero, cuáles serían las medidas que se deben tomar, como sugiere el proyecto, la forma en que se dice cómo se debe dar vista al Ministerio Público.

En el primer punto yo consideró que sí está probado que a través del órgano correspondiente, de la oficina correspondiente el Congreso conoció de la medida cautelar antes de que fueran emitidos los actos que ahora se consideran violatorios de la suspensión, inclusive se narra en el proyecto que el Actuario trató de contactar directamente con el presidente de la Mesa Directiva y le dijeron que tenía que hacerlo por el conducto oficial

correspondiente, para mí ese es el conducto y que por ese solo hecho hace del conocimiento del Congreso en la medida que se había decretado.

En segundo lugar, se propone que sea el presidente de la Mesa Directiva y los secretarios quienes son responsables por el incumplimiento, yo tengo la duda de que los secretarios sean responsables de ese incumplimiento, porque de las disposiciones y facultades que se le otorgan en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco a los secretarios, tanto en su artículo 37 como en el 66, y aun en el artículo 35, tienen facultades ahí, más bien, de representación litigiosa, pero especialmente en el 37 y en el 66 no veo que sea responsabilidad directa de los secretarios poder haber hecho algo ni positiva ni negativamente en relación con la medida cautelar. Creo que ellos no pueden considerarse responsables, porque la responsabilidad recae absolutamente en el Presidente de la Mesa Directiva que pudo haber evitado esa propuesta que hizo él mismo al Congreso y aun, como se narra también en los hechos, en este caso concreto hasta hubo un receso que le permitió todavía hacer con mayor detenimiento el conocimiento de la que ya le habían notificado en la oficina de correspondencia correspondiente; por ello, para mí, desde este punto de vista, el único responsable de este desacato sería el Presidente de la Mesa Directiva.

Y en relación con la cuestión de dar vista al Ministerio Público, no sé si sea necesario establecer con tanto detalle la forma en que se tenga que hacer sino simplemente dar vista al Ministerio Público en los términos en que la propia Ley Reglamentaria lo señala y la Constitución desde luego, y que el Ministerio Público actúe conforme a sus facultades. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Luis María Aguilar. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Yo coincido con lo que acaba de decir el señor Ministro Aguilar, en parte. Creo que efectivamente la responsabilidad es sólo del Presidente de la Mesa Directiva. Si analizamos los mismos preceptos que se están transcribiendo en el proyecto del señor Ministro Valls, efectivamente no resulta a mí parecer posible extender la responsabilidad hacia los vicepresidentes, a los dos que están identificados en el proyecto ¿Por qué razón? Porque como se dice ahí, la organización, el funcionamiento, las relaciones interinstitucionales, etcétera, corresponden exclusivamente al Presidente de la Mesa Directiva. Las funciones que le corresponden a los secretarios son funciones auxiliares, en su caso podrían dar fe de ciertos actos, etcétera, pero esto no me parece que sea un elemento que para el caso concreto pudiera ser constitutivo de alguna responsabilidad. Entonces, en esa parte, creo que sí sería adecuado hacer una acotación en términos de quién es el responsable en relación sólo con el Presidente.

En segundo lugar, cuando se analizaron aquí, hace ya también algún tiempo, los Recursos de Queja derivados del Incidente de Suspensión de la Controversia 59/2007, cinco Ministros, en ese momento, por orden de votación los menciono: Yo, el Ministro Góngora, el Ministro Gudiño, la Ministra Sánchez Cordero y el Ministro Presidente Silva Meza, votamos en el sentido de que la consignación no tendría que hacerse ante Ministerio Público sino que esta Suprema Corte de Justicia directamente tendría que hacer la consignación ante el juez de Distrito de Procedimientos Penales para que determinada ya la comisión del delito contra la administración de justicia por esta Suprema Corte, procediera a la individualización de la pena.

Desde luego si hacemos una lectura directa del último párrafo del artículo 105 de la Constitución, parecería que sólo las resoluciones de fondo que se dicten en controversias y acciones permiten la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución; sin embargo, lo que se sostuvo en esa discusión y en el voto particular que algunos Ministros emitimos, un voto conjunto de la señora Ministra Sánchez Cordero y yo en ese momento, lo que decíamos es que la totalidad del incumplimiento a las resoluciones de la Suprema Corte, entre ellas, en este caso a estas determinaciones que tenían que ver con la suspensión, permitían una aplicación de carácter analógico para que se pudiera, insisto, hacer la consignación directamente ante juez de Distrito. La votación en ese momento fue 6-5, los señores Ministros: Aguirre, Luna, Franco, Azuela, Valls y Ortiz votaron en un sentido, los que dije yo en otro y desde luego esta integración o aquella integración se ha modificado sustancialmente y creo que esta es una cuestión que valdría la pena adicionalmente al tema que plantea el Ministro Aguilar sobre la identificación de los sujetos efectivamente responsables, tomar una nueva consideración porque se ha modificado esto.

Por supuesto el proyecto está hecho en el sentido de la mayoría en ese momento 6-5, pero sí creo que es un tema central que discutiéramos cuál de los dos procedimientos vamos a seguir. Sigo convencido que no es posible que tratándose de casos de supremacía constitucional, donde en su totalidad están determinados a la Suprema Corte de Justicia, el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Suprema Corte, quede a la decisión de una autoridad administrativa como es el Ministerio Público. Creo que para cerrar el sistema de Tribunal Constitucional, para permitir que éste sea órgano supremo e —insisto— órgano de cierre de todo el sistema, a nosotros mismos debe correspondernos —salvo el caso de la excepción en materia de suspensión del juicio de

amparo— la ejecución o la determinación, perdón, de la comisión del delito contra la administración de justicia y la consignación directa ante Juez de Distrito sin pasar por el monopolio del Ministerio Público que prevé la propia Constitución. Sigo convencido de ese punto de forma tal que en esta parte del proyecto votaría en contra señor Presidente, muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío Díaz. Señor Ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Presidente, los antecedentes que tenemos en el tema de suspensión que será sancionado penalmente —dice nuestra Constitución— el que la viole, son en el sentido de dar vista al Ministerio Público, ¿Qué podemos afirmar si vamos a seguir los precedentes? Primero, los hechos violatorios de la suspensión fueron cometidos o le son directamente imputables a tales o cuales funcionarios. Segundo. Con estos hechos dese vista al Ministerio Público, para los efectos de que ejerza su representación social. Estos son nuestros precedentes y no otros. Si vamos a cambiar creo que hay que meditarlo más, lo que se dice es lo siguiente: Están en sede constitucional ante Tribunal Constitucional y aquí se está acreditando el hecho significativo de la violación. ¿Para qué queremos más? Yo digo: bueno, no se ha hecho un estudio penalístico de adecuación al tipo exactamente igual al que prevé la ley para el desacato y otras cosas más.

A mí me gustaría que siguiéramos los precedentes y no es porque dude que estos señores, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en aquel momento, pueda estar libre de culpa. No. Simplemente porque no se hace aquí en el expediente un estudio penalístico de adecuación al tipo y por tanto de probable responsabilidad, no nada más de adecuación al tipo.

Yo dejaría el asunto con esta pequeña modificación, siguiendo los precedentes. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Para una aclaración señor Ministro Cossío Díaz.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Muy breve señor Presidente, creo que plantea muy bien el tema el Ministro Aguirre, si en este momento se va a dar vista al Ministerio Público no es necesario hacer ese estudio, pero si en este momento fuera —insisto— la votación es de 6-5, tampoco es una votación tan holgada en controversias constitucionales, si en este momento fuera a ser al revés, en el sentido de que nosotros determinamos el delito y las modalidades de comisión de éste, etcétera, el delito contra la administración de justicia que prevé el Código Penal Federal, pues sí, efectivamente tendríamos que hacer un ajuste al propio proyecto, pero creo que más bien la respuesta es: primero determinemos cuál de los dos sistemas es el que aplica la violación de suspensión en controversias constitucionales y después veamos si está bien o le falta algo al proyecto.

Yo insisto, el proyecto está hecho con el criterio mayoritario, un criterio exiguo de 6-5, pero creo que éste sería el tema, dada la nueva composición, que debiéramos votar. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias. Señor Ministro Valls Hernández.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Dado el planteamiento que se ha hecho por parte del Ministro Cossío, le pediría señor Presidente, que previamente a seguir con la discusión del asunto votemos si vamos a seguir con nuestros precedentes de dar vista al Ministerio Público Federal —que es como está elaborado el

proyecto— o se va a cambiar en el sentido que propone el señor Ministro Cossío de que nosotros directamente hagamos la consignación a juez.

Yo le pediría que primero se hiciera esa votación, el proyecto está hecho conforme a precedentes. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls Hernández. Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Ministro Presidente. Yo tengo una sugerencia distinta, con todo respeto al señor Ministro ponente.

Yo creo que el planteamiento que hace el Ministro Cossío Díaz es de la mayor trascendencia y relevancia, y algunos de nosotros no nos hemos pronunciado. Yo sugeriría —respetuosamente— que analizáramos los temas de la responsabilidad y para la siguiente sesión pudiéramos posesionarnos quienes no lo hemos hecho sobre el tema, porque realmente hay interpretaciones para los dos lados, todo depende de cómo interpretemos el último párrafo del artículo 105, cuando habla de resoluciones se refiere a todas, o se refiere a las de fondo; es obvio que la Ley Reglamentaria prevé un sistema distinto al que se podría interpretar de una interpretación —valga la redundancia— gramatical o literal, entendiendo por resolución cualquier tipo de resolución.

En sistema de amparo hay un proceso diferente, diferenciado, tratándose de suspensión, tratándose de fondo, pero creo que no necesariamente los sistemas tienen que ser iguales, y una votación tan estrecha como la que ha referido el Ministro Cossío Díaz, yo sí quisiera tener por lo menos un día para poder reflexionar el sentido de mi voto en este punto específico, y por eso sugiero que lo

dejáramos al final de la discusión de este considerando, Presidente. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Estamos a cinco minutos prácticamente de terminar la sesión. Esto es muy importante, definitivamente.

Efectivamente, tenemos que dar dos pasos, el paso previo, la determinación de responsabilidad, a quién o a quiénes. Aquí ya ha aflorado esta situación; ésa es una interrogante que dejamos planteada, y la consecuente es si se da vista al Ministerio Público como está planteado en el proyecto, o se adopta el criterio de la entonces minoría, cuando tres de los señores Ministros no han emitido en ese sentido su voto. Señor Ministro Franco González Salas.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente muy brevemente, nada más para sumarme a quienes se han manifestado porque la responsabilidad se centre en el Presidente de la Mesa Directiva, e inclusive —como yo lo he propuesto— dejando en libertad de que si se establece en el proceso responsabilidad de alguien más, pues se le pueda sancionar, pero yo creo que nosotros debemos centrar la responsabilidad en el Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De acuerdo. Señor Ministro Valls Hernández.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Muy breve también. Estoy de acuerdo en que la responsabilidad se centre en el entonces Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De acuerdo, entonces ése sería el punto a reflexionar para dilucidarlo el próximo jueves en el planteamiento modificado que hace ahora el Ministro ponente de la responsabilidad concreta del Presidente, y lo que resulte de la discusión pero ya a partir de esa propuesta, y ya después el otro tema. ¿De acuerdo?

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí señor.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces, voy a levantar la sesión para convocarlos al próximo jueves que tendrá verificativo en este lugar a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14:00 HORAS)